

de propiedad comunal unos terrenos sobre los cuales los derechos del municipio son dudosos, no ha tenido tampoco, por los motivos indicados, ninguna facultad para mandar exigir el pago de arrendamientos por medio de la fuerza armada, y por consiguiente, al ponerse en ejecucion tal providencia se ha violado el artículo 16 de la Constitucion federal, que otorga no poder ser nadie molestado en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Que aunque el presidente municipal ha negado se prohibiera á los quejosos reunirse en junta sin conocimiento de la autoridad respectiva, obra en autos la órden original que contiene tal prohibicion, y que teniendo las recusaciones que se trataba de impedir un objeto enteramente lícito, cual era el de acordar en ellas todo lo conducente á la mejor defensa de sus derechos, la restriccion que se les impuso ha sido contraria al artículo 9 de la Constitucion, que proclama el derecho absoluto de reunirse y asociarse con un fin lícito. Que no es de resolverse en este juicio sobre la solicitud de los poderdantes del C. Santiago Calderon, para que se declaren nulas las adjudicaciones que de varios terrenos se hicieron á los empresarios de la ferrería de la Encarnacion, por no haber versado el recurso sobre estos hechos, no habiéndose hecho tal solicitud sino en los mismos alegatos que presentaron con posterioridad.

Con fundamento de los artículos 9, 16 y 101 de la Constitucion federal, se decreta: Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Hidalgo en 4 de Abril del presente año, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á los vecinos de Zimapam representados por el C. Santiago Calderon, contra las disposiciones del presidente municipal del mismo lugar, por las que se prohíbe á los quejosos reunirse en junta sin previo aviso de la autoridad respectiva, y se les cobra con la facultad coactiva y em-

pleo de la fuerza armada, las rentas que se supone están adeudando.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*M. de Castañeda y Ndjera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 11 de 1873.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por Orosio Gutierrez, contra el Gefe político de Tehuantepec, por haberlo juzgado y sentenciado á muerte conforme á la ley de 18 Mayo de 1871.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El Promotor fiscal alegando para definitiva, dice: que ha visto el presente juicio de amparo promovido por Orosio Gutierrez contra la providencia decretada por el C. jefe político del Distrito del Estado de Tehuantepec, en virtud de la cual y con fundamento del artículo tercero de la ley de 18 de Mayo de 1871, declarada vigente por la de 23 de Mayo de 1872, lo condenó por el delito de asalto y robo á la última pena.

El quejoso cree que la referida providencia vulnera las garantías individuales consignadas en los artículos 13, 14, 16, 18 y 20 del Código fundamental de la República; y solicita de la justicia federal la protección y amparo que impetra.

De las constancias que obran en el acta del juicio seguido por la gefatura de Tehuantepec, resulta, que de los delitos atribuidos á Gutierrez no hay prueba plena, porque los testimonios de los que declaran sobre los hechos que se le imputan no merecen fé jurídica, segun las leyes vigentes; y como la ley que suspendió las garantías para los salteadores y plagarios prescribe la justificación completa del delito, es inconcuso que cuando este no se justifica, el acusado no puede ser condenado con arreglo á la ley escepcional, porque entonces queda fuera del alcance de la suspensión de garantías que establece aquella, por resultar que la autoridad que juzgó se constituye en juez especial, y que la ley aplicada es una ley privativa: ambas cosas están prohibidas por la Constitución federal.

Por tales consideraciones, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, este ministerio pide al Juzgado que ampare y proteja á Orosio Gutierrez contra la providencia del jefe político de Tehuantepec, en virtud de la cual juzgó al quejoso y lo sentenció á la pena de muerte, como salteador, con infracción de la primera parte del artículo 13 del Pacto federal, cuya pena le fué conmutada en la de diez años de presidio en San Juan de Ulúa.

Oaxaca de Juarez, Junio 17 de 1873.—  
*José M. Ballesteros.*

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo á que me remito.

Oaxaca de Juarez, Junio 17 de 1873.—  
*José M. Ballesteros.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Oaxaca de Juarez, Junio 23 de 1873. Visto este juicio de amparo promovido por Orosio Gutierrez, contra la providencia decretada por el C. Gefe político del Distrito de Tehuantepec, Lic. Juan Escobar, en virtud de la cual, y con fundamento del art. 3 de la ley de 18 de Mayo de 1871, declarada vigente por la de 23 de Mayo de 1872, le condenó por los delitos de asalto y robo á la pena ordinaria, que le fué conmutada por la Legislatura del Estado en la de diez años de presidio, cuyos delitos fueron perpetrados en el parage de Quiebrahacha, camino de Tehuantepec á Juchitan, la noche del día 19 de Diciembre último en la persona de Doña Carmen Toledo y su familia; y con cuya providencia violó el expresado jefe político en la persona del quejoso, las garantías que le conceden los arts. 13, 14, 16, 18 y 20 del Código fundamental de la República; el informe de la autoridad ejecutora; lo pedido por el C. Promotor fiscal; las pruebas rendidas respectivamente por el interesado y dicho Ministerio, de las que no resulta justificada en forma la culpabilidad que se atribuyó al acusado Gutierrez, como era preciso para poderle condenar, atacándose, en efecto, entre otras garantías de las expresadas, las que le conceden los artículos 13 y 14 del citado Código, por la aplicación violenta de la ley de 18 de Mayo de 1871, que exige no solo la justificación completa del cuerpo del delito, sino la del delincuente; y cuanto mas tener presente y ver convino:

La Justicia federal, con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, y ley de 20 de Enero de 1869, declara: que ampara y protege al expresado Orosio Gutierrez, contra el acto que motiva este recurso. Hágase saber este fallo, publíquese y remítase el juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales. El C. Lic. Juan Ignacio Fagoaga, Juez primero suplente de Dis-

trito del Estado, así lo sentenció, mandó y firmó. Doy fé.—*Juan Ignacio Hagoaga.*—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juarez, Julio 4 de 1873.—*Rodolfo Sandoval.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre 23 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por Orosio Gutierrez, contra el Gefe político de Tehuantepec, por haberlo juzgado y sentenciado á muerte conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, como culpable de haber concurrido al asalto y robo en cuadrilla y despojado, verificado la noche del 1º de Diciembre del año pasado en las personas de Doña Carmen Toledo, su hijo Francisco Rivera y el sirviente de estos Laureano Osoño, y que se infringieron además varios golpes á los dos primeros; con cuyos procedimientos se ha violado, en concepto del quejoso, las garantías que otorgan los artículos 14, 16, 18, 20 y 24 de la Constitución federal, y

Considerando: que no puede caber duda en que el hecho de que fue acusado Orosio Gutierrez está comprendido en los delitos que castiga la ley de 18 de Mayo de 1871, contra salteadores y plagiarios, prorogada por un año mas por la de 23 de Mayo del año pasado, conforme á la cual fue juzgado y sentenciado; y por tanto que no ha habido violación del artículo 14 constitucional, que previene: que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicable al caso: Que los artículos 16 y 18 que invoca el quejoso en su favor y como infringidos por el hecho de haber sido condenado por solo presunciones, no tiene absolutamente ninguna conexión con el hecho

á que se los pretende aplicar; pues el primero dispone unicamente: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento; que en caso de delito flagrante, toda persona puede aprehender al delincuente y á sus cómplices, poniéndolos sin demora á disposicion de la autoridad inmediata, y el 18, que solo habrá lugar á prision por delito que merezca pena corporal, y que en cualquiera estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le puede imponer tal pena, se pondrá en libertad bajo de fianza: Que entre las garantías constitucionales suspendidas por la repetida ley de 18 de Mayo, se encuentran las que otorga el artículo 20, por lo que no puede motivar el amparo federal, la no observancia de alguna de las prescripciones de este artículo: Que si bien es cierto que en la sentencia pronunciada por el Gefe político, se hace alusion á los delitos cometidos anteriormente por Orosio Gutierrez, esto no es para hacerle nuevamente cargo de ellos, ni se le aplica pena alguna por los mismos, por lo que tampoco puede decirse que haya habido infraccion del artículo 24, en la parte que dispone, que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Por tales consideraciones, y con fundamento del artículo 101 de la Constitución general se resuelve: Primero: Que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Oaxaca, en 23 de Junio del presente año, que concedía el amparo al quejoso. Segundo: Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Orosio Gutierrez, contra los procedimientos del Gefe político de Tehuantepec, por los que fué juzgado y sentenciado conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 contra salteadores y plagiarios.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes, pu-

blíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landá,* secretario.

Es copia que certifico. México, 10 de Noviembre de 1878.—*Lic. Emilio Ordaz,* oficial mayor interino.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por D. Ramon Portillo y Gomez, contra la Direccion de Rentas del Estado, por el cobro que le hace de cuatrocientos ocho pesos quince centavos, por rezagos y recargos de la contribucion del diez al millar; impuesta por decreto de 14 de Junio de 1861.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Ramon Portillo y Gomez, presentó escrito con fecha 2 de Junio á este Juzgado, quejándose de que la direccion general de rentas del Estado, le habia librado mandamiento de pago por cuatrocientos ocho pesos quince centavos (\$ 408.15 cents.) procedentes de la contribucion de diez al millar, decretada en 14 de Junio de 1861, sobre \$ 25.610 diferencia entre el valor de la Hacienda del Puente, porque hizo el pago en la época del impuesto, y el de 100.055 que es el

primitivo existente en los libros de avalúos de la direccion, mas los recargos de cincuenta por ciento con arreglo al artículo tercero de la ley de 14 de Junio citada, y de seis y cuarto conforme al decreto número 12 de 2 de Diciembre de 1861, con cuyo hecho, dice, se violó en su persona la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitucion, pues el cobro de la direccion importa el juicio y la declaracion de que con una suplantacion de valores en sus bienes, defraudó al erario una parte del impuesto mencionado; el recargo de cincuenta por ciento es una pena improcedente en este caso, y aun la declaracion de lo que debió pagar por el impuesto implicado de parte del ciudadano director de rentas, una abrogacion de facultades que no correspondian sino á las juntas calificadoras; por lo que, y habiéndose notificado que debia enterar esa cantidad dentro de tercero dia para evitar los recargos y procedimientos ejecutivos que previene la ley, pedia se decretara la inmediata suspension del acto reclamado, y previos los trámites legales se les amparase en definitiva en el goce de la garantía invocada.

Sustanciado el punto de suspension conforme al artículo quinto de la ley de 20 de Enero de 1869; por auto de 30 de Junio se mandó suspender el embargo con que se comunicaba al quejoso en el mandamiento de la direccion; y repitiendo esa oficina su informe ya rendido con anterioridad, para justificar el procedimiento reclamado, dice: que la ley expedida por la Legislatura del Estado de México en 14 de Junio de 1861, impuso por una sola vez y como única contribucion general el diez al millar á la propiedad raiz y capitales moviliarios de 500 pesos arriba, y conforme al artículo cuarto del reglamento de la misma fecha, las bases que debian tenerse presentes para las calificaciones, eran para la propiedad raiz los valores porque pagaban la contribucion de cinco y seis al millar segun fuesen las fincas rústicas ó urbanas; que segun el decreto de 2 de Diciembre de 1872, la direccion